

MÉXICO: LA EDUCACIÓN SUPERIOR BAJO EL POPULISMO*

Roberto Rodríguez Gómez

Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

roberto@unam.mx

Alma Maldonado Maldonado

Investigadora en el Departamento de Investigación Educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

almaldo2@gmail.com

Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de México para el período 2018-2024 y ha definido dos objetivos para la educación: i) revertir la reforma educativa de su predecesor, Enrique Peña Nieto; y ii) generar nuevas políticas que crearán mayores oportunidades para los sectores marginados de la población. Su gobierno populista ha señalado nuevos desafíos para el futuro inmediato de la educación superior que incluyen un crecimiento sin precedentes, enfocando la educación superior sobre los principales problemas económicos y sociales de México y brindando oportunidades de educación superior para las personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Este ensayo examina los retos y problemas que enfrentará el gobierno entrante al implementar la política de educación superior para lograr sus propósitos.

Promesas del nuevo gobierno

Durante su campaña, López Obrador propuso eliminar los exámenes de admisión de los procesos de selección de educación superior para ofrecer acceso abierto a todos y becas como apoyo adicional a quienes más lo necesitan. Además, prometió acceso a universidades tanto públicas como privadas, al tiempo que otorgaría autonomía a las instituciones privadas que cumplieran con «estándares de calidad», lo que implica libertad con respecto a cualquier supervisión gubernamental. En México, muy pocas instituciones privadas tienen este nivel de autonomía, que solo les es otorgado por mandato presidencial. Ambas propuestas generaron fuertes críticas porque implicaban la creación de un cupón universitario que podría usarse para asistir a instituciones privadas y, al mismo tiempo, eliminar la supervisión estatal sobre el sector privado. La sugerencia de subsidios públicos a las instituciones privadas parecía una contradicción

* Este artículo es una traducción de la versión publicada en The World View: <https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/mexico-higher-education-under-populism-0>

con la ideología de un gobierno de izquierda. Aunque el gobierno no ha seguido la implementación de estas propuestas, tampoco las ha descartado.

“ La sugerencia de subsidios públicos a las instituciones privadas parecía una contradicción con la ideología de un gobierno de izquierda ”

López Obrador también anunció que su gobierno abriría 100 nuevas “universidades” (Universidades para el Bienestar Benito Juárez García) que ofrecerían planes de estudio orientados a las necesidades de desarrollo local, al tiempo que proveerían oportunidades de educación a los jóvenes más desfavorecidos en las regiones más pobres de México. En 2019, al proyecto se le asignó un presupuesto de mil millones de pesos (52,6 millones de dólares).

Primeros reveses y críticas

El 15 de agosto de 2018, López Obrador había prometido a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), donde están representadas todas las universidades autónomas, que, de ser electo, mantendría la inversión pública en instituciones de educación superior.

“ El borrador del presupuesto federal para 2019 incluía un recorte del 32% a las instituciones públicas de educación superior, lo que reflejó una nueva austeridad y provocó fuertes protestas ”

En México, más del 90% del presupuesto público de educación superior proviene de los subsidios del

gobierno. El borrador del presupuesto federal para 2019, presentado en noviembre de 2018, incluía un recorte del 32% a las instituciones públicas de educación superior, lo que reflejó una nueva austeridad y provocó fuertes protestas de los rectores de las universidades públicas.

En última instancia, el gobierno otorgó a las instituciones públicas autónomas el mismo presupuesto asignado en 2018, ajustando el monto a la tasa de inflación. Todas las instituciones de educación superior públicas no autónomas, controladas por la autoridad educativa central, sufrieron recortes, lo que dio como resultado que el gasto público total para educación superior en 2019 fuera de 1.700 millones de pesos (90,3 millones de dólares estadounidenses), ajustado a la inflación, lo que representó una disminución del 6.2% en financiación a la educación superior pública.

Reforma normativa y nuevos motivos de disputa

El 12 de diciembre de 2018, López Obrador envió al congreso una iniciativa de reforma constitucional que proponía eliminar la evaluación obligatoria de los maestros de educación primaria, y dos cambios sobre la educación superior: uno para que la educación superior fuera obligatoria, algo que ningún país desarrollado ha hecho, y el segundo para que la educación superior en todas las instituciones públicas fuese gratuita. El texto original eliminó la autonomía universitaria garantizada por la Constitución mexicana. El gobierno de López Obrador argumentó que fue solo un error tipográfico y no intencional. Sin embargo, a la mayoría de los rectores, académicos y estudiantes de universidades públicas les preocupaba que este error no se solucionara antes de la aprobación de la reforma. Gracias a la intervención legislativa, este error se resolvió en el texto definitivo de la reforma constitucional.

“

Los legisladores no solo restablecieron la autonomía universitaria, sino que insistieron en la obligación estatal de aumentar la capacidad de inscripción en las instituciones públicas para todos los estudiantes que cumplan con los requisitos de ingreso

”

Como resultado de la presión de los partidos políticos de la oposición: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), la propuesta presentada por el presidente fue modificada con una reforma que contó incluso con el apoyo del propio partido político de este: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Los legisladores no solo restablecieron la autonomía universitaria, sino que insistieron en la obligación estatal de aumentar la capacidad de inscripción en las instituciones públicas para todos los estudiantes que cumplan con los requisitos de ingreso. Supuestamente, el congreso también ha comprometido fondos suficientes para garantizar la educación gratuita y obligatoria en las instituciones públicas de educación superior, pero ha ordenado que estas últimas puedan establecer sus propios requisitos de ingreso. En otras palabras, esto no es obligatorio, sino una interpretación más limitada que implica que el Estado tiene que ofrecer alternativas a los estudiantes que no son admitidos en la universidad de su elección.

Política ambiciosa, recursos limitados

El sistema de educación superior de México cuenta con 4.3 millones de estudiantes (66.5% en instituciones públicas y 33.5% en instituciones privadas),

lo que representa el 39% del grupo de edad entre 18 a 22 años. El gobierno de López Obrador ha propuesto educación superior para todos los graduados de bachillerato para el año 2024. Esto requeriría de 1.912.982 lugares adicionales o un promedio de 300.000 nuevos espacios por año. Si se alcanza este objetivo, el sistema incorporaría más del 55% del grupo etario. La tasa de crecimiento actual es de 150.000 estudiantes de educación superior recién matriculados por año; duplicar esto sería una tarea monumental, más aún en ausencia de una financiación suficiente o estable para el sector. Hasta ahora, el gobierno no ha delineado una estrategia clara para lograr este objetivo. Incluso si las nuevas universidades Benito Juárez funcionaran a capacidad plena, agregarían apenas el 2% a la matrícula nacional de educación superior.

“

Incluso si las nuevas universidades Benito Juárez funcionaran a capacidad plena, agregarían apenas el 2% a la matrícula nacional de educación superior

”

Finalmente, a pesar del éxito de la oposición en limitar los cambios propuestos por el gobierno, las perspectivas para la educación superior siguen siendo sombrías. Centrar los recursos en becas para estudiantes y limitar los fondos a instituciones públicas, programas de posgrado, investigación, desarrollo tecnológico, innovación y programas internacionales limitará el potencial futuro de estas actividades. La educación superior en México, en un período de populismo, será incapaz de mantener un nivel aceptable de calidad y competitividad.